

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS-UTUADO
PANEL VII

EL PUEBLO DE
PUERTO RICO

Recurrido

V.

LUIS ALBERTO
TORRES RIVERA

Peticionario

KLCE201601963

CERTIORARI
procedente del
Tribunal de
Primera Instancia,
Sala de Utuado

Caso Núm.:
L LE2013G0095
Y OTROS

Por:
ART. 3.1 LEY 54 Y
OTROS

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir

Lebrón Nieves, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016.

El 13 de octubre de 2016, el peticionario, señor Luis A. Torres Rivera (en adelante, el peticionario o señor Torres Rivera), presentó por derecho propio ante este Tribunal de Apelaciones escrito titulado *Apelación*, el cual acogemos como *certiorari*, por ser lo procedente en derecho. El peticionario nos solicita la revisión de *la Resolución* emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado, el 19 de septiembre de 2016, notificada el 3 de octubre de 2016. Mediante la aludida *Resolución* el foro recurrido declaró No Ha Lugar la moción presentada por la parte peticionaria, la cual tituló "*Habeas Corpus al amparo de los Art. 65, 66 y 67 Ley 246-2014, Art. 4 Ley más favorable*".

Por los fundamentos que exponremos a continuación, se desestima el recurso de *certiorari* de epigrafe, ello debido al incumplimiento con las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento del mismo.

A

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en múltiples ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y controversias. *S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra*, 182 DPR 675, 682 (2011). Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que los asuntos concernientes a la jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. *González v. Mayagüez Resort & Casino*, 176 DPR 848, 856 (2009). Al tratarse de un asunto que incide sobre el poder del tribunal para adjudicar una controversia, la falta de jurisdicción se puede levantar motu proprio, pues un tribunal no tiene discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. *Souffront v. A.A.A.*, 164 DPR 663, 674 (2005). Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la controversia”. *Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom*, 190 DPR 652, 660 (2014).

B

Por otro lado, la Regla 34(E)(1) de nuestro Reglamento¹, dispone que la inclusión de un apéndice debe contener, entre otros, los siguientes requisitos:

(E) Apéndice

(1) Salvo lo dispuesto en el apartado (2) de este inciso y en la Regla 74, la solicitud incluirá un Apéndice que contendrá una copia literal de:

[. . .]

(b) La decisión del Tribunal de Primera Instancias cuya revisión se solicita, [. . .].

(c) Toda moción debidamente sellada por el Tribunal de Primera Instancia, resolución u orden necesaria para acreditar la interrupción y reanudación del término para presentar la solicitud de

¹ 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E)(1).

certiorari y la notificación del archivo en autos de copia de la resolución u orden.

(d) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de cualesquiera de las partes que forme parte del expediente original en el Tribunal de Primera Instancia, en las cuales se discuta expresamente cualquier asunto planteado en la solicitud de *certiorari*, o que sean relevantes a ésta.

(e) Cualquier otro documento que forme parte del expediente original en el Tribunal de Instancia y que pueda ser útil al Tribunal de Apelaciones a los fines de resolver la controversia.

Con respecto a los apéndices incompletos, nuestro más Alto Foro ha expresado lo siguiente: [D]ebemos aclarar que generalmente nos hemos movido a desestimar recursos por tener apéndices incompletos **cuando esa omisión no nos permite penetrar en la controversia o constatar nuestra jurisdicción.**

(Cita omitida)(Énfasis nuestro). *Vázquez Figueroa v. E.L.A.*, 172 DPR 150, 155 (2007).

Finalmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha resuelto expresamente que debemos evitar que las partes utilicen la comparecencia por derecho propio como subterfugio para no cumplir con las normas procesales, esto en cuanto a la presentación y perfeccionamiento de los recursos. *Febles v. Romar*, 159 DPR 714, 722 (2003).

II

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso presentado. Veamos.

En su escrito ante nuestra consideración, el señor Torres Rivera nos solicita, en esencia, que modifiquemos la *Sentencia* emitida por el foro recurrido. No obstante, al revisar el expediente ante nos, pudimos constatar, que la parte peticionaria no anejó la *Sentencia* de la cual nos solicita la modificación. Por consiguiente,

desconocemos por cual delito este fue encontrado culpable y la pena a la cual fue sentenciado.

Además de lo anterior, el peticionario tampoco anejó al recurso de epígrafe la moción original mediante la cual alegadamente le solicitó al foro recurrido la aplicación del Artículo 4 (Principio de Favorabilidad) del Código Penal de Puerto Rico de 2012, en virtud de la Ley Núm. 246-2014.

Dichas omisiones por parte del peticionario, e incumplimiento con la Regla 34(E)(1) de nuestro Reglamento, tienen como resultado un recurso tan defectuoso que nos impide atender el mismo en sus méritos y revisar la corrección del dictamen que se pretende impugnar.

En vista de lo anterior, procedemos a desestimar el recurso de Revisión Administrativa de epígrafe de conformidad con la Regla 83(C) del Reglamento de este Tribunal², el cual le confiere facultad a este Tribunal para a iniciativa propia desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de jurisdicción.

III

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso de *certiorari* de epígrafe, ello debido al incumplimiento con las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento del mismo.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Dimarie Alicea Lozada
Secretaria del Tribunal de Apelaciones

² 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C).